



18 de Diciembre de 2021

## **Informe político de la Coordinadora de IULV-CA**

**89% de los votos a favor**

**8% de los votos en contra**

**3% de abstenciones**

Celebramos esta coordinadora andaluza en la antesala de las navidades. Periodo consumista por excelencia en el que mejoran las cifras del paro a golpe de contratos temporales, se obvian los compromisos medioambientales con la incitación a un consumo irresponsable y se derrocha en el lucimiento de centros históricos impracticables. También hay otra navidad, de encuentro con seres queridos, de descanso vacacional, de consumo responsable y de ejercicio de solidaridad con quien más lo necesita. En todo caso, se advierte ya desde los mensajes institucionales del gobierno andaluz un total alejamiento de la realidad sirviéndose del universo navideño como excusa. Sin embargo, la realidad está ahí y toca afrontarla. Por eso, este informe debe abordar tres cuestiones de coyuntura de grave trascendencia pero obviados en el discurso oficial en estas fechas: sequía, pandemia e inflación.

Desde el 2 de noviembre estamos en **estado oficial de sequía**. No llueve lo suficiente. Los embalses están a menos del 40% de su capacidad y, con esta tendencia, no se garantiza un futuro abastecimiento. A la falta de precipitaciones hay que sumar otros dos factores determinantes para este problema de primer nivel. En primer lugar, la crisis climática conlleva un aumento de las temperaturas y, por ende, de la evapotranspiración. Menos agua para cauces y acuíferos aunque el nivel de lluvias fuese mayor al actual.

En segundo lugar, el crecimiento de las superficies regadas ha sido espectacular en los últimos años. En Andalucía un 38.3% de la superficie de cultivo es de regadío. Sin duda, la crisis del sector agrícola por los bajos precios en origen está incentivando este aumento del regadío, bien por el cambio a cultivos más rentables que exigen más agua, bien por la búsqueda de mayor productividad mediante el

aumento del riego. En cualquier caso, es insostenible. El 85% del consumo total de agua del país corresponde al regadío. La superficie regada es mayor de la que se puede soportar de forma sostenible.

Incremento de temperaturas por el cambio climático, déficit de precipitaciones y mala gestión hídrica conducen a un “colapso hídrico” de consecuencias catastróficas. Es incomprensible la falta de atención a este problema por parte del gobierno andaluz y es propio de política extraterrestre la apuesta por la cultura del ladrillazo y depredación medioambiental que se esconde tras la “Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía” (LISTA). También es ajena a las soluciones sostenibles la apuesta por faraónicas infraestructuras hidráulicas, en la línea de los intereses de grandes constructoras y que no cuestionan el modelo de producción agrario intensivo.

**La incidencia acumulada de contagios por coronavirus nos sitúa en riesgo alto.**

Vuelven restricciones a la UE y se barajan en España de continuar la tendencia. Ciertamente, los índices de vacunación en nuestro país nos hacen afrontar esta nueva ola en mejores condiciones que otros países del entorno, no en vano, ya han comenzado la vacunación infantil e, incluso, las dosis de refuerzo a población mayor de sesenta años. No obstante, nuevas variantes hacen tambalear las certezas adquiridas con la vacuna y traen nuevas restricciones con su consiguiente impacto económico. Es imposible salir de esta crisis global sin afrontar un proceso de vacunación mundial y sin el refuerzo de los sistemas sanitarios públicos. Es absolutamente irresponsable el desmantelamiento del sistema sanitario público andaluz a golpe de despidos, precarización y desvío de recursos públicos al sistema privado. No solo contraviene el ejercicio del derecho a la salud contemplado en nuestro Estatuto de Autonomía, también supone retrasar el control de la pandemia con la inestabilidad económica derivada. La gestión de la pandemia por el gobierno andaluz es un fracaso porque no se ha alineado con la encomienda de la OMS y de otras instituciones internacionales: el reforzamiento de la atención primaria y del sistema sanitario público. Ha primado su estrategia neoliberal sobre protección de la salud pública. En frente, hay cada vez más movilización social y sindical en defensa de la sanidad pública a lo largo y ancho de Andalucía. Seguiremos



volcándonos en estas movilizaciones hasta que haya una rectificación del gobierno andaluz.

**España es, de las diez mayores economías de la UE, en la que más aumenta la inflación.** Este aumento sostenido de precios puede acabar afectando a los intereses que gravan el endeudamiento del país y servir de subterfugio para frustrar la política de estímulos de los bancos centrales. Vivienda y transporte están detrás de la fuerte subida de los precios, la mayor desde 1992. En el caso de la primera, es la partida de electricidad la que ha resultado más determinante. Los altos precios del gas y del petróleo son causa de dicha subida. El impacto en las familias trabajadoras es enorme, en tanto tienen que dedicar una mayor parte de sus presupuestos a la factura de la luz, en detrimento de otros gastos en consumo necesarios y que, además, dinamizarían la economía. Pero también las empresas, con otros tipos de contratos bilaterales a largo plazo, sufren esta subida, especialmente las electrointensivas (ArcelorMittal, Sidenor, Fertiberia, etc. han reducido la producción con carácter temporal).

Como se decía anteriormente, es un fenómeno global aunque con especial intensidad en España en relación a la UE. Las causas están en la mencionada crisis energética (ante la que estamos muy expuestos sin control público del sector energético), en la “crisis de los contenedores” (problemas en la cadena de suministro) y en la alta demanda propia de la recuperación económica.

Como es de esperar, esta inflación aumenta la **conflictividad laboral**. Las subidas salariales, imprescindibles para no perder más poder adquisitivo, están encontrando el bloqueo de la patronal en la negociación de los convenios. La huelga del Metal en Cádiz o la lucha de las limpiadoras son buena muestra de ello. Y más que vienen por delante. La huelga del Metal ha puesto encima de la mesa la necesidad de abordar procesos de industrialización en Andalucía, especialmente en aquellas zonas que han ido perdiendo industria (como la Bahía de Cádiz) en las últimas décadas. Pero también que la organización de los trabajadores en sindicatos de clase, la solidaridad social con sus demandas y la movilización cambian la



18 de Diciembre de 2021

correlación de fuerzas frente a la patronal. Esta máxima: “organización, movilización y solidaridad” debe empujar a las capas populares en las demandas concretas que, en última instancia, apelan a una recuperación económica justa que no deje a nadie atrás. El papel del gobierno andaluz en este conflicto fue el esperado: apuntalar a una patronal irresponsable que no quería negociar. Y, sin despeinarse, acto seguido de la consecución del acuerdo entre sindicatos y patronal apuntarse el éxito de su mediación. Este rol, contrario a las y los trabajadores, del gobierno andaluz se reproduce en otros conflictos laborales en los que está directa o indirectamente implicado. Así se ve en los conflictos de Salud Responde, Emergencias 112, 061, las PTIS o las limpiadoras. Plantillas feminizadas que se han evidenciado, no solo esenciales, sino imprescindibles en la pandemia y que sufren pésimas condiciones laborales. Concretamente en el sector de la limpieza importantes empresas con suculentos contratos con la JUNTA de Andalucía impiden tímidas mejoras en las condiciones de trabajadoras muy precarizadas. Al gobierno andaluz ni está, ni se le espera. Continúa subcontractando con empresas que precarizan a sus plantillas mientras reciben fondos públicos.

También se expresa la defensa, por parte del gobierno andaluz, de las grandes multinacionales en la salvaje liberalización de los horarios comerciales. El impacto en el sector del comercio es terrible. En la línea de las demandas de la gran patronal, establecen una liberalización de horarios comerciales que solo benefician a las grandes superficies. Por el contrario, supone un enorme menoscabo a las y los trabajadores del sector que ven imposibilitado su derecho a la conciliación y el descanso; al pequeño comercio, incapaz de sostenerse frente a la salvaje competencia de las grandes superficies apoyadas por el gobierno andaluz; y a los consumidores, los cuales verán cómo, progresivamente, ven reducida la diversidad de formatos comerciales en detrimento del comercio local y de proximidad.

Este ambiente de aumento de la conflictividad y de impostergables mejoras salariales acordes a la coyuntura económica confirma la importancia de **derogar la reforma laboral**. Las mejoras laborales, indispensables para una recuperación justa, están truncadas en un marco legal al gusto de la CEOE. Reducir la temporalidad, acabar con la precariedad de la subcontractación, recuperar los convenios del sector,



18 de Diciembre de 2021

la ultraactividad de los convenios, etc. imprimen un giro de 180 grados con respecto al modelo neoliberal impuesto por gobiernos anteriores. Solo gracias al papel de

Unidas Podemos desde el gobierno y a la presión sindical se ha abierto la posibilidad de dicho giro.

Este impulso de políticas progresistas ha tenido un importante avance con la **renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género**. La cuestión de la desigualdad de género sigue siendo una de las brechas de la desigualdad más hondas en Andalucía y España. La precariedad y la pobreza siguen teniendo rostro de mujer, gracias a la alianza del patriarcado y el neoliberalismo, aupado por las

políticas de la derecha y la extrema derecha. La cara más brutal de la barbarie patriarcal es la violencia machista que los hombres ejercen contra las mujeres sus hijas e hijos. La violencia de género que parejas y ex parejas hombres ejercen contra sus compañeras y ex parejas, y sus hijas e hijos. La violencia sexual, la violencia vicaria, la violencia institucional, la violencia económica. Por ello es imprescindible avanzar en políticas públicas que combatan todas las formas de violencia machista, y celebramos que se haya renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado por el Ministerio de Igualdad y suscrito por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, menos VOX.

El menosprecio del gobierno andaluz por las y los trabajadores ha tenido la consabida repercusión en la calidad de los servicios públicos. Como es bien conocido, en la hoja de ruta neoliberal de Moreno Bonilla está el hacer negocio con los derechos sociales. Eso se traduce en **desmantelar servicios públicos, externalizar servicios y despedir empleados públicos**. Quienes han sido héroes en los peores meses de la pandemia o en la extinción de incendios en verano hoy son material fungible. Precariedad de las trabajadoras de ayuda a domicilio, ocho mil sanitarios despedidos, dos mil setecientos docentes y mil bomberos forestales hacen una enmienda a la totalidad del gobierno andaluz.

Los audios del vicepresidente, Juan Marín, desvelaron lo que todas temíamos: **los PJA estaban cargados de recortes y la negociación con los grupos parlamentarios era una farsa**. Los intereses partidistas de Moreno Bonilla han primado sobre algo tan crucial para nuestra tierra como era tener unos presupuestos que impulsaran la creación de empleo, el refuerzo de los servicios públicos o el cambio de modelo productivo. La calculadora electoral está detrás de cada decisión de un gobierno andaluz inane en su iniciativa política, tan solo desplegada en las reformas fiscales a favor de una minoría o en eliminar trabas a los pelotazos urbanísticos. Sirviéndose de la prerrogativa que tiene Moreno Bonilla para convocar elecciones, especula con el adelanto electoral para espantar la crítica a su pésima gestión. Horas de tertulias y páginas de artículos sobre un adelanto que nunca llega pero que siempre sirve para desviar la atención. Moreno Bonilla no adelanta porque sabe que las urnas pueden echarlo del gobierno. Tiene un gobierno débil, sostenido por un partido en descomposición terminal y por otro dando bandazos con el que se disputa el electorado ultra. Pies de barro. Un fracaso de legislatura.

Desde Unidas Podemos por Andalucía estamos absolutamente preparados para cualquier eventualidad. Sin perder la atención de lo importante: los problemas que sufre la mayoría social andaluza. **Hay que valorar positivamente la puesta en marcha del plan estratégico de UP**, ya aprobado en la anterior coordinadora andaluza. El Encuentro en Mollina permitió realizar un diagnóstico y un plan de trabajo compartido con la participación de más de cien cuadros de IU, Ps y AV. En este sentido, fue particularmente relevante la implicación de dirigentes provinciales. El siguiente hito ha sido la celebración del acto del 4d en Córdoba. Un éxito en cuanto a la asistencia de público, desbordándose el aforo pero, sobre todo, por el mensaje lanzado. Un mensaje valiente y coherente con lo que demanda el electorado progresista andaluz. El manifiesto “Un Frente Amplio para ganar Andalucía” expresó el compromiso pleno por aunar esfuerzos en el campo progresista y propiciar una candidatura amplia con vocación de gobierno. Supone un llamamiento al tejido social y a las organizaciones progresistas a construir colectivamente un programa para transformar Andalucía y a construir una



18 de Diciembre de 2021

candidatura para poner al gobierno andaluz al servicio de la gente. Entendemos la conformación de un Frente Amplio como un proceso político de ampliación de alianzas que tiene un primer hito en las elecciones andaluzas pero que ha de atravesar el conjunto del país y significarse en las elecciones generales y municipales. La ciudadanía progresista demanda dicho proceso y las organizaciones, de carácter político o social, están interpeladas a dicho objetivo. Unidas Podemos por Andalucía asume ese mandato. Al igual que ocurrió con Convocatoria por Andalucía, entiende que la diversidad es capaz de encontrarse en un programa común y que la pluralidad no se borra sino que enriquece un candidatura que debe ser esperanza del pueblo andaluz. Este proceso debe ampliar alianzas, hacer protagonista al tejido social, confeccionar un programa político y, por todo lo anterior, construir esperanza para la gente.